

# Transparencia y responsabilidad para la recuperación

La responsabilidad y el deber del gobierno de transparentar, exponer y someter a escrutinio público la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la sociedad le ha confiado, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos, es cada vez más urgente. Al día de hoy, la ocultación de información sobre las contrataciones del gobierno, la falta de prudencia en el uso de los recursos públicos; el verdadero descuadre del presupuesto gubernamental y la omisión de presentar los estados financieros ha permitido postergar los ajustes a las finanzas públicas necesarios para potenciar el desarrollo económico. Hemos comprobado cómo la falta de ajustes a tiempo ha aumentado vertiginosamente los costos sociales y económicos, lo que ha requerido drásticas medidas de corrección cuyos resultados e impacto son aún impredecibles.

A raíz de la crisis económica y fiscal que vivimos, las instituciones han sido incapaces de responder de forma acertada a los desafíos, lo que ha dejado al desnudo las debilidades de la gobernanza y el deterioro institucional que había escapado de ser notable en

periodos de relativa estabilidad económica. La incapacidad del gobierno de promover un debate abierto y transparente para formular políticas públicas de índole social, económica y fiscal para evitar la paralización de la prestación de los servicios públicos esenciales es altamente preocupante.



**Dra. Eneida  
Torres  
de Durand**

Directora  
Ejecutiva Centro  
de Gobernanza  
Pública y  
Corporativa

La capacidad del sector público se ha visto empañada por problemas estructurales que han sido ignorados por mucho tiempo. Los estudios realizados por el Centro de Gobernanza han identificado que la mayor disfuncionalidad del gobierno es la falta de transparencia que inhibe la focalización y rigor en la articulación de las decisiones que se dan como parte de la progresiva politización, lo que afecta la orientación a largo plazo de las políticas públicas en general en el País.

Es evidente que nos encontramos en una encrucijada sin precedentes en la que la sociedad demanda más y mejores servicios para incrementar su calidad de vida. No obstante, se han debilitado los lazos entre la gente y la calidad y riqueza de la vida de la "polis", dando paso al deterioro de las instituciones públicas y su capacidad de generar re-

sultados para potenciar el bien común de la sociedad.

En 2006, la crisis económica y fiscal cambió el panorama, colocando al centro tres nuevos desafíos. En primer lugar, obligó a un ajuste dramático de las finanzas públicas, exigiendo mayor prudencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En segundo lugar, aumentó la demanda de los ciudadanos de un gobierno más transparente y responsable. En tercer lugar, la recesión económica y el endeudamiento del País revelaron las debilidades de la gobernanza, un marco regulatorio deficiente y la formulación deficiente de las políticas públicas. En resumen, la crisis expuso problemas latentes que se habían ignorado, agravó otros y creó otros nuevos. La complejidad de estos problemas impide que el País se recupere y obstaculiza la capacidad de construir una visión y un mapa de ruta para encaminar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico inclusivo que mejore los estándares de vida de todos.

Para adelantar la recuperación del País y encaminar las reformas inaplazables requeridas, es altamente necesario afrontar los retos de mejorar las condiciones económicas, propiciar la generación de empleos y la creación de riqueza y atender las causas de la inequidad social que se vive al presente. Además, es impostergable transparen-

tar la información pública como paso indispensable hacia la responsabilidad del gobierno para con la ciudadanía y conlleva la obligación de los gobernantes de rendir cuentas.

La transparencia y la responsabilidad gubernamental están estrechamente vinculadas. La transparencia gubernamental significa acceso fácil y oportuno a información fidedigna, completa, comprensible y comparable en el ámbito internacional. Alude a un sector público abierto a la ciudadanía en general y a los mercados financieros en todo lo que atañe a estructurar prioridades, interacciones, contabilidad, indicadores de gestión y predicciones. La responsabilidad significa que los funcionarios deben responder y rendir cuentas ante los ciudadanos por la integridad, la honestidad, la legalidad, la prudencia en la utilización de los recursos y la calidad formal y sustancial de su gestión.

No podemos afirmar que la transparencia y la responsabilidad por sí solas garantizan un buen desempeño económico, pero sí podemos señalar categóricamente que estos principios de buena gobernanza pública contribuyen a lograrlo. Sin transparencia y sin rendición de cuentas se disminuye la actividad económica, la cohesión social se atrofia y el bienestar de la sociedad se empobrece.